

Editorial

El contexto del proceso de paz con las FARC

The context of the peace process with the FARC

ANGELA MARÍA ARBELÁEZ HERRERA

Desde el pasado mes de octubre de 2012, el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC iniciaron un proceso de diálogo para la finalización del conflicto armado. Aunque, según las encuestas, los ciudadanos aprueban la decisión del Gobierno para negociar con la guerrilla, hay gran escepticismo frente a sus resultados, justamente por la evidencia histórica que no permite a los colombianos creer nuevamente en las FARC como sí lo hicieron en el pasado. Lo paradójico es que el actual diálogo que se lleva a cabo en La Habana posiblemente sí termine en un acuerdo de paz. Y quizás sea así porque el escenario interno e internacional cambió para las FARC.

En el ámbito interno, las FARC ya no poseen la capacidad militar para enfrentar al Estado como lo hicieron al final de la década de 1990, en la que columnas de más de cuatrocientos guerrilleros se desplazaban por la selva sin ser detectados por el Estado y con victorias militares frente al Ejército Nacional. Pero la reforma militar que el gobierno de Andrés Pastrana emprendió y que el de Álvaro Uribe catapultó, la hicieron retroceder a la guerra de guerrillas. La reforma militar permitió al Ejército Nacional ganar la guerra con mayor inteligencia, capacidad de combate aéreo, operaciones conjuntas y control a los corredores de movilidad.

* Magíster en Estudios Políticos y Comunicadora Social de la Universidad Pontificia Bolivariana; docente de la Facultad de Ciencias Políticas e integrante del grupo de investigación en Estudios políticos de la misma universidad. Actualmente adelanta sus estudios de Doctorado en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Medellín, Colombia. Correo electrónico: angela.arbelaez@upb.edu.co

Las FARC, por su parte, tuvieron que reinventarse a través del plan Renacer para defenderse del Ejército con minas antipersonales y francotiradores y atacar la población civil con carros bombas. Su objetivo es demostrar que siguen vivas.

En cuanto al ámbito internacional, la región latinoamericana ya no refleja las tensiones internacionales que se produjeron por la injerencia estadounidense en las zonas de influencia rusa, tras las intenciones del gobierno de George W. Bush de expandir el brazo de la OTAN a Georgia y Ucrania. Esto hizo que Vladimir Putin fortaleciera sus alianzas con el gobierno de Hugo Chávez y que el de Uribe, en respuesta, remozara su sociedad con los norteamericanos. En el medio de las tensiones colombo venezolanas, las FARC se beneficiaron porque obtuvieron de los vecinos, además refugio y apoyo militar, una mayor justificación política para su lucha. Pero como en el gobierno de Barak Obama el proyecto de ampliación de la OTAN quedó congelado, las tensiones internacionales entre las dos potencias cambiaron de plano, ahora se centró en la cuestión de Irán y Siria. En ese contexto, el presidente Juan Manuel Santos pudo desideologizar las relaciones de Colombia en América Latina, reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y conseguir que los gobiernos de izquierda de la región invitaran a las FARC para que dejen la lucha armada y accedan al poder por la vía democrática.

Tanto por su reducida capacidad militar actual, como por el contexto internacional que les reclama convertirse en un partido político, las FARC no están en posibilidad de prodigar la oportunidad que les ha brindado el gobierno de Juan Manuel Santos. Tal como lo ha afirmado Joaquín Villabos, ex guerrillero del FMLN salvadoreño, las alternativas de un proceso de paz no se miden nunca por la buena voluntad del enemigo sino por qué tanto un cambio en el contexto nacional o internacional puede conducirlo a transformar la guerra en política. Mantenerse en la guerra representa para las FARC adentrarse en un escenario de sobrevivencia incierto y perder la poca legitimidad que les queda. La muerte de Chávez y la inestabilidad política por la que pasa Venezuela juegan, además, en contra de la guerrilla, que podría quedarse sola y sin respaldo político o apoyo militar.

Otro de los factores que tiene en favor del proceso de paz es que de su éxito también se podría beneficiar Cuba, país garante, que busca aumentar su prestigio internacional para presionar un cambio en la diplomacia norteamericana. El último logro de los cubanos fue haber obtenido la presidencia *pro tēmpore* de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, a comienzos de este año.

En general la comunidad internacional apoya el proceso de paz. Los gobiernos de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Portugal, Bra-

sil, entre otros, han hecho explícito su respaldo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de negociar el fin del conflicto armado con las FARC y lo han calificado como el primer gran paso en la consolidación de la paz. También se han pronunciado favorablemente líderes mundiales de la talla de Kofi Annan, Nelson Mandela, Jimmy Carter y el Papa Francisco.

Ahora bien, esta legitimidad internacional permitirá que las negociaciones de La Habana puedan sortear las normas del derecho internacional que prohíben el indulto a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Si el proceso con las FARC acaba en un acuerdo de paz, seguramente prevalecerá la doctrina internacional que dice que todos los conflictos internos deben terminar con una negociación de paz, sobre aquella que considera el respeto por los derechos humanos un imperativo en la política y la moral internacional.

Pero como el indulto vendrá acompañado de la transformación de la guerrilla en un partido político, el reto mayor que tendrán que enfrentar las FARC será que más del 70% de la población colombiana, según las encuestas, afirma que nunca votaría por candidatos a corporaciones públicas que hayan sido miembros de la organización guerrillera. Las FARC tendrán que mostrar un verdadero proceso de reconversión dentro de la sociedad colombiana y deberán cumplir con los pilares de la justicia transicional, por lo menos, aquellos que tienen que ver con la verdad y la reparación a las víctimas. Sólo la guerrilla del M19 logró una votación histórica en las primeras elecciones en las que participaron como movimiento político. El éxito se debió a la decisión de no regresar a las armas, pese al asesinato de su máximo dirigente Carlos Pizarro. Sin embargo, luego de haber alcanzado un 25% de las curules de la Asamblea Nacional Constituyente, la Alianza Democrática M19, tuvo que emprender un arduo camino para obtener el respaldo popular en unas elecciones. Y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, luego de constituirse en un partido político en 1992, tardó dos años para conquistar sus primeros éxitos electorales y sólo hasta 2009 logró consolidarse como una fuerza política importante en El Salvador.

Aunque las FARC han dicho que no han luchado tantos años simplemente para convertirse en parlamentarios y que no acordarán la paz hasta no ver un cambio mínimo en las condiciones sociales de la gente, la guerrilla no está en situación de proponer grandes reformas políticas o económicas, no sólo porque el equipo negociador del Gobierno parece tener muy claro que la institucionalidad del Estado no está en discusión, sino porque lo acordado en La Habana tendrá que pasar la prueba de la refrendación por parte de los ciudadanos. Si moderan sus propuestas podrían salir triunfantes. Si, por el contrario, sobreestiman el al-

cance de sus ideas, no lograrán derribar el muro de incredulidad que las separa de los colombianos.

No obstante, a la hora de refrendar los acuerdos deberá considerarse cuáles de las reformas propuestas pueden debilitar la institucionalidad del Estado. Este es el caso de una posible ampliación de la descentralización administrativa. Este es uno de los temas que ha estado en las discusiones de La Habana y a la luz de las tendencias más actuales de la administración pública, resulta muy adecuado en el fortalecimiento de los gobiernos locales, los cuales pueden invertir de manera más eficiente los recursos del Estado porque ya conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades. Sin embargo, la descentralización en Colombia, consagrada en la Constitución del 1991, se ha convertido en botín de guerra para los grupos armados, los cuales, como sanguijuelas, se apoyan en políticos corruptos para desangrar las arcas del Estado. Este clientelismo armado se ha visto favorecido por la debilidad institucional en muchos municipios de Colombia y por el poco control que tienen sobre sus bases los directorios nacionales de los partidos políticos.

Así mismo, la ampliación de las Zonas de Reserva Campesina podría aumentar la histórica debilidad estatal en la periferia del territorio colombiano. Aunque el equipo negociador del Gobierno ha dicho que la desmilitarización de las zonas rurales no será negociada, aceptar nuevas formas de autonomía política como las que gozan hoy los territorios colectivos de los afrodescendientes y los resguardos indígenas, es allanar el camino a futuras movilizaciones para forzar la retirada de las Fuerzas Armadas. El problema es que muchas de las Zonas de Reserva Campesina existentes, en trámite o que han sido solicitadas al Incoder, se encuentran ubicadas en regiones con histórica presencia de grupos armados. Por ejemplo, las últimas zonas de reserva autorizadas por el presidente Juan Manuel Santos están ubicadas en el Catatumbo, los Montes de María, Cesar, Sumapaz y Meta, lugares en los que las guerrillas y los paramilitares han sido más fuertes que el Estado.

Ahora bien, pese a que las condiciones parecen estar dadas, la firma del acuerdo de paz entre las guerrillas y el Gobierno no será el pilar que ponga fin a la violencia que impide el desarrollo rural en el territorio colombiano. Las bandas criminales, herederas de todas las redes de poder violento que han construido por décadas las mafias y los grupos armados, son ya una realidad que compete con el Estado por el dominio de territorios y poblaciones, incluso, ahora, en muchos de ellos, las FARC son sólo parte del músculo violento del nuevo crimen organizado.

El historiador Marco Palacios ha sostenido que en Colombia los procesos de paz son cuatrienales, dependen del ciclo electoral y de la suerte de los presidentes en la arena política. Independientemente de las estrategias en la mesa, los procesos de paz han dependido de las tácticas de juego electoral y de las tendencias de la “opinión” fabricadas o no por los medios de comunicación. Para Palacios estas tendencias ayudan a entender el fracaso de todas las negociaciones, carentes de consenso, eficacia y coherencia. Hasta ahora solo el presidente Virgilio Barco ha conseguido firmar un acuerdo de paz. Sin embargo, ésta fue más el resultado de la debilidad militar de sus interlocutores (M19). Lo conseguido por César Gaviria con una facción del EPL, obedeció al coletazo de proceso anterior y a la oferta de participación, con voz pero sin voto, en la Asamblea Nacional Constituyente. Veremos hasta qué punto la paz de Santos se beneficia del agotamiento bélico en el que se encuentran las FARC y de las presiones internacionales que las impelan a convertirse en un partido político.